



## Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia.](#)

### Usted es libre de:

**Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

**Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia



### Bajo los siguientes términos:



**Atribución** — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.

**No hay restricciones adicionales** — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

## **RIESGO DE APATRIDIA PARA INFANTES VENEZOLANOS. ANÁLISIS DESDE LA VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY 1997 DE 2019**

### **Resumen**

La nacionalidad, como atributo de la personalidad, adquiere mayor relevancia por ser fuente de otros atributos y por ello del inventario de derechos que le asisten al ser humano en un Estado Social de Derecho. En oposición a ello opera la apatridia, riesgo actual al que se encuentran expuestos miles de niños de ascendencia venezolana nacidos en Colombia en el marco del exacerbado flujo migratorio originado en la crisis política, económica y social del vecino país, fenómeno social que da lugar a las dos principales fuentes de riesgo de apatridia identificadas por la Agencia de la ONU para los refugiados: las situaciones de desplazamiento y la falta de registro de nacimiento. La Ley 1997 de 2019 es la iniciativa legislativa colombiana que pretende disminuir dichos riesgos y permitir a los infantes venezolanos el acceso a los derechos fundamentales contemplados en el artículo 44 de la Constitución Política. Sin embargo, el presente análisis pretende corroborar si aspectos como, la ausencia de disposiciones concretas sobre responsabilidades administrativas y la vigencia temporal de la norma, disminuyen el potencial de protección de la misma, caso en el cual se precisaría el perfeccionamiento de la misma y de las medidas administrativas requeridas para su operación.

**Palabras clave:** Apatridia, derechos fundamentales, domicilio, migración venezolana, nacionalidad, infancia.

### **Abstract**

Nationality, as an attribute of personality, acquires greater relevance because it is a source of other attributes and therefore of the inventory of rights that assist the human being in a Social State of Right. In opposition to this, statelessness operates, a current risk to which thousands of children of Venezuelan descent born in Colombia are exposed in the framework of the exacerbated migratory flow originated in the political, economic, and social crisis of the neighboring country, a social phenomenon that gives rise to the two main sources of risk of statelessness identified by the UN Refugee Agency: displacement situations and lack of birth registration. Law 1997 of 2019 is the Colombian legislative initiative that aims to reduce said risks and allow Venezuelan infants access

to the fundamental rights contemplated in article 44 of the Political Constitution. However, this analysis intends to corroborate whether aspects such as the absence of specific provisions on administrative responsibilities and the temporary validity of the norm, diminish its protection potential, in which case it would be necessary to improve it and the administrative measures required for its operation.

Keywords: Statelessness, fundamental rights, domicile, Venezuelan migration, nationality, childhood.

## **Introducción**

En las siguientes líneas se presentará una reflexión sobre el contenido de la Ley 1997 de 2019 cuyo propósito como también se explicará es garantizar a los niños y niñas de origen venezolano a los derechos fundamentales que se ponen en riesgo cuando se enfrentan a que en su caso se configure el fenómeno de la apatridia. Esta circunstancia personal, ha sido reconocida por la comunidad internacional como un verdadero problema humanitario que merece toda la atención por parte de los Estados, especialmente aquellos que como Colombia se precian de su calidad de Estados Sociales de Derecho.

Para desarrollar lo anterior se analizarán en un primer apartado los aspectos relacionados con la nacionalidad, su concepción legal y jurisprudencial, así como la evolución de este derecho y atributo de la personalidad en el Derecho Internacional. Del mismo modo se abordará el tema de la apatridia explicando su impacto en la persona humana y las posiciones que al respecto han tomado estamentos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de instrumentos internacionales que empiezan a estructurarse al finalizar la segunda guerra mundial.

En tercer lugar se abordará el contenido de la Ley 1997 de 2019 con el fin de contrastar su contenido y vigencia, con la caracterización de la realidad que presenta la población migrante de origen venezolano que actualmente se encuentra en el país, esto con el fin de estructurar un criterio claro sobre las consideraciones que se deberían tener en cuenta respecto a la vigencia y el contenido de esta norma, con el fin de que esta sea cumpla con el propósito de disminuir el riesgo de apatridia y garantizar el acceso a los derechos fundamentales de los niños y niñas de ascendencia venezolana que han nacido, nacen y continuarán naciendo en el país. Dichas recomendaciones se expondrán en el apartado tercero con el que culmina el análisis.

La hipótesis consiste en pensar que la expedición de la Ley 1997 de 2019 constituye una medida legislativa propuesta para disminuir los factores de riesgo de apatridia para los infantes de ascendencia venezolana que nacen en el país; sin embargo, aspectos como la vigencia temporal de la norma, la ausencia en la misma de medidas de carácter administrativo, así como la realidad social que enfrentan los ciudadanos venezolanos en el país representan un riesgo para garantizar el logro de los propósitos para los cuales fue diseñada dicha norma.

El objetivo general del trabajo es analizar las posibles falencias que presenta la Ley 1997 de 2019 en términos de disminución del riesgo de apatridia para infantes de ascendencia venezolana nacidos en Colombia a partir del contraste del contenido de la norma y su vigencia temporal con la realidad social que enfrenta actualmente la población migrante de origen venezolano.

Dicho objetivo se pretende desarrollar a partir de los objetivos específicos que en términos prácticos son (i) Relacionar las especificidades de orden constitucional, legal, jurisprudencial y de derecho internacional que estructuran el concepto de nacionalidad y su relación con los derechos fundamentales; (ii) contrastar el contenido de la Ley 1997 de 2019, las posiciones jurisprudenciales internas y de derecho internacional en materia de nacionalidad y protección de derechos a los infantes en condición migratoria o desplazamiento transnacional con la realidad social de esta población y (iii) establecer los aspectos que debería tener en cuenta el Estado colombiano para garantizar los propósitos de la Ley 1997 de 2019 en materia de disminución de riesgo de apatridia de infantes de ascendencia venezolana nacidos en Colombia.

### **Justificación**

Al respecto se ha partido de que Colombia ha venido perfeccionando una tradición constitucional que se enfoca en gran medida al reconocimiento y efectividad de los derechos fundamentales, así como el establecimiento de medidas de protección para garantizar la efectividad en el acceso a los mismos. Del mismo modo ha desarrollado una política de Estado dirigida a la protección de los derechos humanos especialmente dirigida a quienes hacen parte de comunidades vulnerables entre las cuales se debe incluir a la población infantil de ascendencia venezolana que nace en Colombia en el marco de una compleja dinámica migratoria.

Esta realidad debe animar a quienes hacen parte de la comunidad académica de la Universidad Católica de Colombia para desarrollar ejercicios investigativos como el propuesto, que tiene un doble propósito: por un lado, incrementar el conocimiento respecto del cuerpo normativo que concentra la investigación del estudio; por otro, interpretar la realidad social de miles de personas que han tenido que alejarse de sus entornos sociales y familiares con el fin de buscar en países como Colombia, mejores condiciones de vida y oportunidades no solo laborales sino de sobrevivencia.

Se trata de un acto de responsabilidad social que busca amalgamar las capacidades investigativas, el conocimiento jurídico y las técnicas de análisis con el fin de entregar a la comunidad académica, social e institucional, un insumo que permita una mayor comprensión sobre un fenómeno que afecta a ciudadanos de una nación hermana que otrora brindara oportunidades de progreso y desarrollo para miles de colombianos; pero que hoy, en virtud de una coyuntura política, económica y social ve a sus ciudadanos enfrentados al sino del desarraigo, circunstancia que no puede ser ajena a la visión de la sociedad colombiana.

En ese orden de ideas el estudio adquiere importancia en la medida que puede constituirse en un insumo para la comunidad académica e incluso para los responsables de las políticas públicas. Unos y otros pueden encontrar en su contenido un argumento para fortalecer futuros ejercicios académicos similares y para reflexionar sobre los aspectos que se deben tener en cuenta para el diseño de normas que disminuyan los indicadores de injusticia social y contribuyan a la construcción de una nueva realidad para las personas en condiciones de vulnerabilidad.

## **Método**

Por las características del fenómeno, se considera que el estudio a desarrollar corresponde a la investigación socio jurídica apoyada en la revisión bibliográfica y jurisprudencial. Esto teniendo en cuenta que el estudio demanda no solo la interpretación de criterios jurídicos concretos como la nacionalidad y los derechos, sino además, amalgamar dichos conceptos con una realidad social. Desde allí se podrían obtener el análisis mixto que no renuncia a la idea de medición de la eficacia normativa descrito por Agudelo (2018).

Además de la consulta necesaria a la fuente normativa, se acudirá a fuentes de análisis doctrinal sobre las normas relacionadas con el derecho a la nacionalidad y la apatridia desde la legislación colombiana y desde los criterios recientes que al respecto se han dado en el contexto del Derecho Internacional. Del mismo modo se revisarán estudios sociológicos sobre la realidad de las personas migrantes de origen venezolano que se han movilizado hacia Colombia, realizando un análisis más concreto en el caso de los infantes nacidos en el territorio colombiano y el acceso que estos han tenido a los derechos fundamentales que la Constitución colombiana en su artículo 44 otorga a este segmento de la población.

Se ha tenido cuidado de recopilar fuentes recientes para garantizar la actualidad del análisis. Para ello se han obtenido libros y artículos que no superan los cinco años de antigüedad, privilegiando el análisis en aquellos que fueron publicados a partir del año 2018. Estos documentos se caracterizan por tener una descripción más amplia sobre la realidad de la población migrante de origen venezolano en el país y las nuevas posiciones jurisprudenciales que han surgido en los tribunales internacionales con ocasión de controversias relacionadas con la nacionalidad.

Un acceso fácil a fuentes de información a partir de bases de datos institucionales, estatales y de organizaciones no gubernamentales constituyen una ventaja para obtener la información requerida para el estudio. No ocurre lo mismo en el caso de las controversias internas que se han dado en torno a la nacionalidad ya que no se evidenció una relatoría nacional especialmente dedicada a este tipo de casos.

Los aspectos éticos que rigen el desarrollo del presente proyecto son (i) el respeto por las reglas de conducta en la investigación académica que incluyen la no tolerancia al plagio y el debido respeto a los derechos de autor; (ii) el respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes contemplados en la legislación colombiana y (iii) el respeto y consideración por la población migrante de origen venezolano.

## **Problema de investigación**

La vigencia temporal de una ley así como las medidas administrativas que garanticen el cumplimiento de sus propósitos, marcan la diferencia entre la posibilidad de acceder o no a los derechos que de ella emanan. Esta realidad debe ser objeto de análisis especialmente en una circunstancia social y humanitaria de enormes dimensiones como el fenómeno migratorio desde Venezuela hacia Colombia producto de las dificultades políticas, económicas y sociales que se presentan el primero de los Estados en cita desde hace más de dos lustros y que ha exacerbado la movilización humana con fines de sobrevivencia, generando un riesgo de apatridia para miles de infantes y con ello, las dificultades de acceso a los derechos fundamentales que le asisten a estos en virtud del ordenamiento constitucional interno y la normatividad internacional. De esta manera, si una norma como la Ley 1997 de 2019, tanto por su contenido como por su vigencia temporal, resulta insuficiente para garantizar un acceso real y efectivo a una población vulnerable como la infantil, claramente se deben replantear los lineamientos de la misma para incrementar la materialización de los propósitos para los cuales fue creada.

Desde esa perspectiva la pregunta de investigación es la siguiente:

¿Cuáles son las falencias que se pueden identificar en el contenido de la Ley 1997 de 2019 que afectan su propósito de protección de derechos fundamentales como el reconocimiento a la personería jurídica de los infantes venezolanos nacidos en Colombia?

## **Estado del Arte**

Rodríguez et al (2020) en su artículo “Reflexiones sobre nacionalidad, apatridia y derechos de los niños. Análisis comparado entre Colombia y República Dominicana” realizan una verificación de contraste, desde los estándares internacionales de derechos humanos, entre las legislaciones colombiana y dominicana, puntualmente en lo que tiene que ver con la manera en que uno y otro Estado han diseñado sus políticas públicas migratorias y las han materializado en sus respectivos cuerpos legales para atender la emergencia humanitaria que se ha originado a partir del éxodo de venezolanos hacia dichas naciones, todo esto teniendo como foco de análisis el caso particular de los niños y los derechos que se encuentran en riesgo en estas circunstancias (Rodríguez, Ávila y de los Santos, 2020).



El texto se relaciona con el presente estudio en la medida que se ocupa de aspectos esenciales que se pretenden abordar tales como la nacionalidad, la apatridia y los derechos de los niños, todo ello bajo una verificación de los estándares internacionales que se han establecido para el caso particular de personas en condición de desplazamiento o refugiados.

Hurtado (2020) en su artículo “Apoyo educativo del Estado colombiano a niños, niñas y adolescentes de origen venezolano: límites, oportunidades y argumentos” presenta una radiografía sociológica sobre el fenómeno migratorio desde Venezuela hacia Colombia haciendo énfasis en las afectaciones que esta coyuntura ha tenido respecto a uno de los derechos fundamentales de la niñez: la educación. Para ello parte de una descripción del fenómeno migratorio en la última década, las características de la población migrante y las medidas que ha tomado el Estado Colombiano y autoridades territoriales como la Secretaría de Educación del Distrito Capital, para facilitar el acceso de los niños y adolescentes a la red distrital de educación.

El texto se relaciona con el presente trabajo en la medida que aborda una problemática específica en materia de derechos que eventualmente se limita o restringe debido a la ausencia de nacionalidad. También permitirá tener un acercamiento a los beneficios directos e indirectos que representa para la sociedad colombiana, el asumir con sentido de solidaridad y búsqueda de equidad, las responsabilidades que se tienen con la población migrante.

Bonil (2019) en su artículo “Análisis de política pública de recepción de Venezolanos en Colombia” presenta un recorrido sobre los aspectos hito que ha tenido el Estado colombiano en su proceso de construcción de política pública migratoria incluyendo las decisiones que se han venido tomando en el caso particular de los venezolanos que han ingresado de manera masiva al país en la última década. Presenta igualmente una relación de los instrumentos de derecho internacional que han sido ratificados por Colombia y una descripción del manejo administrativo que se ha dado en términos de documentos para transitar o permanecer en el país tales como la Visa R, la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (T.M.F.) y el Permiso Especial de Permanencia (P.E.P.). El autor concluye el texto realizando una descripción sobre el diseño de planes, programas y proyectos para la inmigración venezolana en Colombia.

El texto se relaciona con el tema de investigación ya que describe aspectos directamente relacionados con el objeto de estudio en particular los relacionados con la política migratoria del país y la normatividad que se ha desarrollado alrededor del mismo.

Palacios et al (2019) en su artículo “Nuevas realidades de los flujos migratorios hacia Colombia” realizan un análisis sobre la manera en que el flujo migratorio de Venezuela hacia Colombia ha pasado de ser una dinámica de intercambio laboral y académico para tomar la caracterización de crisis humanitaria. A partir de ello realizan un recorrido sobre la regulación y las políticas migratorias diseñadas por el Estado colombiano presentando además una caracterización de la población migrante desde el diagnóstico de los derechos a la educación, la salud, el trabajo y la justicia. Concluyen con una descripción de los retos y las perspectivas de la ley migratoria realizando un balance de los ideales que se deberían tener en cuenta para garantizar el despliegue de una política integral que responda realmente a las necesidades de esta comunidad (Palacios, Londoño y Lozano, 2019).

El artículo resulta pertinente para el estudio que se pretende abordar pues presenta un contraste entre la dinámica migratoria que se ha dado entre la República Bolivariana de Venezuela y Colombia en lo corrido del presente siglo y la manera como dicha dinámica ha influido en el diseño de políticas públicas orientadas a la garantía de derechos fundamentales a partir del reconocimiento de vulnerabilidad que tienen las personas que se encuentran en esta situación de movilidad transnacional.

Soto (2018) en su artículo titulado “El derecho humano a la nacionalidad: perspectiva europea y latinoamericana” presenta una reflexión sobre las controversias que se han dado en el continente europeo y en Latinoamérica en torno a la figura jurídica de la nacionalidad como derecho humano, explicando como los tribunales que se encargan de controlar la efectiva aplicación del mismo han logrado limitar la competencia exclusiva de los Estados en lo que respecta a la atribución, adquisición o pérdida de la nacionalidad, indicando con ello que si bien determinar quiénes son o no nacionales continua siendo una competencia estatal, dicha discrecionalidad ha venido restringiéndose a medida que evoluciona el derecho internacional, indicando como ejemplo los casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han impuesto límites a la soberanía estatal en esta materia, exigiendo a los Estados el no adoptar prácticas o diseñar leyes relacionadas con el otorgamiento de la nacionalidad, que favorezcan el incremento del número de personas apátridas.

El texto resulta pertinente para el estudio que se aborda ya que presenta una descripción sobre las concepciones jurisprudenciales del derecho internacional respecto al derecho humano a la

nacionalidad y las limitaciones que los tribunales internacionales han impuesto a los Estados para impedir que estos contribuyan al crecimiento de los niveles de apatridia en el mundo.

## **1. Aproximación conceptual a la nacionalidad como atributo de la personalidad**

Existe un consenso en torno al concepto de nacionalidad que confluye en que se trata del vínculo jurídico y político que existe entre una persona y un Estado cuya regulación es competencia exclusiva de la legislación interna de este último que, en el marco de su derecho público interno, determina las condiciones y requerimientos para su adquisición, ejercicio e incluso las eventuales causales que podrían desembocar en su pérdida (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010, pág. 11). Algunos autores amplían el concepto indicando que se trata de un nexo que faculta, por un lado al Estado para exigirle a la persona considerada como nacional e identificado como miembro de su población, el cumplimiento de ciertas obligaciones; por otro, el de las personas que tienen tal cualificación, de demandar al ente estatal el otorgamiento y efectividad de derechos y privilegios (Palma, 2009).

Lo anterior representa una distinción entre las personas que son habitantes del territorio de un Estado que pueden ser (i) nacionales (en ellos media un vínculo directo con el Estado originado preferentemente en el nacimiento como factor primario), (ii) ciudadanos (nacionales que han alcanzado la edad necesaria para el ejercicio de derechos políticos) y (iii) extranjeros (personas que conviven con los anteriores, sin vínculos de nacionalidad respecto al Estado y por regla general privados del ejercicio de derechos políticos) (Henao, 2013).

A partir de aspectos como los anteriores es que la doctrina ha descrito a la nacionalidad, no solo desde su carácter de atributo de la personalidad derivado de la relación con una institución político social que le debe garantía a una persona por ser la sede de sus relaciones sociales (Valencia & Ortiz, 2016, pág. 470), sino desde su condición de elemento fundamental para la definición del Estado pues a la par que el territorio físico es determinante para establecer los límites geográficos de la soberanía estatal, la nacionalidad hace lo propio en materia humana.

Claramente el concepto de nacionalidad empieza a estructurarse de manera paralela al concepto de nación, que como lo explica Hernández (2008) citando a Sieyès se dio en tres momentos, el primero de ellos correspondiente a aquel en el cual un número considerable de individuos aislados coincidieron en su intención de reunirse; el segundo, aquel en el que los asociados le dan

consistencia a su unión a partir de la voluntad común; y el tercero, aquel en el que se origina la voluntad común representativa que en términos prácticos marca el origen de la nación moderna (Hernández, 2008, pág. 267).

Todo lo anterior converge en la nacionalidad como generadora de efectos jurídicos los cuales se dan en principio en el derecho nacional pero además irradian en el derecho internacional. Dichos efectos son cuatro según la doctrina: (i) el efecto por medio del cual se confiere a las personas nacionales de un Estado derechos políticos al tiempo que les señalan sus deberes militares; (ii) el efecto habilitador para desempeñar determinadas funciones públicas y ejercer derechos o desarrollar actividades que son vedadas a los extranjeros; (iii) el efecto habilitador para obtener el pasaporte, retornar al país y eventualmente ser repatriado en circunstancias de extrema pobreza; y, (iv) el efecto que habilita a la persona para acudir en pro de la obtención de protección diplomática del país del cual es nacional cuando sus derechos son lesionados en el exterior (ACNUR, 2019).

Complementando lo anterior debe tenerse en cuenta las formas en que se adquiere la nacionalidad, las cuales son tres principalmente según la doctrina: (i) el *ius soli* originado por el hecho de nacer en el suelo o territorio del Estado; (ii) el *ius sanguinis* también descrito como derecho de sangre, esto es adquirido en razón al hecho de ser hijo de un nacional del Estado; y finalmente (iii) el *ius domicili* que otorga la posibilidad de obtener la nacionalidad con base en el hecho de residir o habitar en un territorio determinado (Villegas, 2011).

## **1.1. Algunos parámetros constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la nacionalidad en Colombia**

### **1.1.1. Antes de la Constitución de 1991**

El derecho a la nacionalidad tiene una amplia tradición constitucional en Colombia sin que por ello se hayan presentado algunas modificaciones. La Constitución Política de 1886 se ocupaba del tema en sus artículos 8° y 9° en los que, en su orden, se establecía la manera como se adquiría y la manera en que se perdía la calidad de nacional colombiano. En cuanto a la adquisición, el primero de los artículos citados señalaba que adquirirían la calidad de nacionales colombianos por tres motivos: (i) por nacimiento, (ii) por origen y vecindad y (iii) por adopción (Constitución Política, 1886).

En el primer caso la norma en cita indicaba que la adquisición de la nacionalidad por nacimiento se sometía al hecho de que el padre o la madre contaran con la nacionalidad colombiana, o que, en el caso de hijos de personas extranjeras, estas se encontraran domiciliadas en la República; agregaba además, que los hijos de padre y madre colombianos nacidos en el exterior, que posteriormente se domiciliaren en el país se considerarían nacionales colombianos.

En lo relacionado con el origen y la vecindad, la Constitución de 1886 disponía que también se consideraban nacionales a los hijos de padre o madre naturales de Colombia, que se domiciliaran en la República; pero además, le otorgaba la misma posibilidad a cualquier hispanoamericano (entendiendo por tal a cualquier nacional de los 19 países del continente americano cuyo dialecto oficial es el español), que solicitara ser inscrito en la municipalidad en la que se establecieran, lo que constituía menores restricciones respecto de las que actualmente se encuentran vigentes según se explicará más adelante. Algo similar ocurría en el caso de la adquisición de la nacionalidad por adopción que correspondía a la tercera alternativa de dicha Carta, en la que se prescribía que podían acceder a ella los extranjeros que solicitaran y obtuviesen la carta de nacionalidad; sin embargo no mencionaba algún requisito de tiempo para realizar dicho trámite.

Por último, en lo que tiene que ver con la pérdida de nacionalidad, la redacción original del artículo 9° de la referida Norma Rectora disponía que ello ocurría cuando el nacional colombiano adquiría la carta de naturaleza en un país extranjero, condición a la que se sumó la de fijar el domicilio en dicho país de acuerdo a la reforma que tuvo el texto superior en 1936 (Henoa, 2013), medidas que vendrían a ser proscritas por la Constitución de 1991 como también se revisará a continuación.

### **1.1.2. El nuevo escenario de la Constitución de 1991**

La entrada en vigencia de la actual Constitución marca un momento de mayor exaltación de los valores de la nacionalidad en Colombia al punto que elimina las causales por las cuales esta se perdía, circunstancia que actualmente solo se da cuando la persona renuncia de manera expresa según lo establece el inciso segundo del literal C del artículo 96 en el que, de manera paralela, se indica que a los nacionales por adopción no se les exige renunciar a su nacionalidad original (Constitución Política, 1991), lo cual es concordante con el interés mundial de disminuir la apatridia expresado en instrumentos como la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961.

En lo que tiene que ver con las formas de adquisición de la nacionalidad, el referido artículo 96 de la Norma Rectora contempla que se adquiere la nacionalidad por nacimiento o por adopción. En el primer caso, se registró un cambio respecto a la redacción original de 1991 a partir del Acto Legislativo 01 de 2002 que incluye la posibilidad de adquirir la nacionalidad al hijo de padre o madre colombiano nacido en el exterior acudiendo a la oficina consular de la República integrante de la misión diplomática en el Estado en el que se dio el nacimiento, con el fin de realizar el correspondiente registro.

Los parámetros de adquisición de la nacionalidad por nacimiento o por adopción se pueden apreciar en la siguiente tabla:

**Tabla 1.** Adquisición de la nacionalidad según el artículo 96 de la Constitución Política

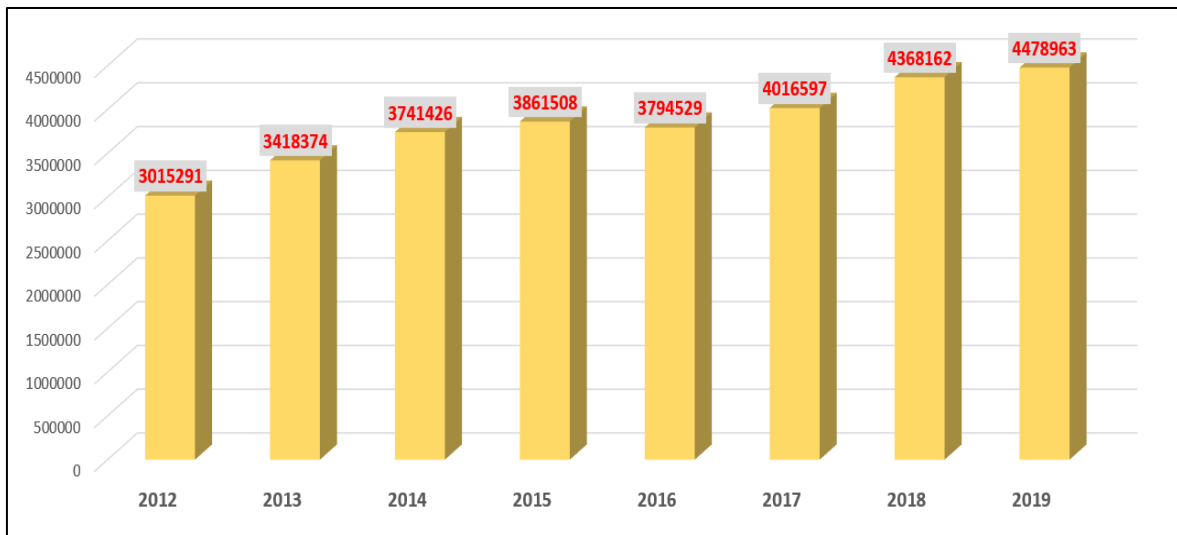
<p><b>POR NACIMIENTO</b></p>	<p>a) Naturales de Colombia, con una de dos condiciones:</p> <p>(i) que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o</p> <p>(ii) que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento.</p> <p>b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio colombiano o <b><u>registraren en una oficina consular de la República.</u></b> (El texto resaltado fue agregado mediante el Acto Legislativo 01 de 2002)</p>
<p><b>POR ADOPCIÓN</b></p>	<p>a) Extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley.</p> <p>b) Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieron.</p> <p>c) Miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos</p>

Fuente. Elaboración propia con base en la Constitución Política de 1991

Es así como se establece la posibilidad de que las personas colombianas que se encuentran residiendo en un país extranjero acudan a la respectiva representación diplomática (oficina

consular), alternativa que resultaba muy pertinente si se tienen en cuenta que el país ha tenido una elevada tasa de movilización de nacionales hacia el exterior en las últimas décadas, alcanzando un promedio anual muy cercano al 10% de la población nacional (Migración Colombia, 2020), razón por la cual los migrantes colombianos han llegado a representar el 1,1% de la población migrante mundial, ubicándose en el segundo país de Latinoamérica con mayor número de migrantes internacionales superado solo por México (Garavito et al, 2019).

**Gráfico 1.** Movilización de colombianos hacia el exterior 2012 - 2019



Fuente. Elaboración propia a partir de las cifras de Migración Colombia (2020)

Otro de los aspectos destacables en la Constitución de 1991 tiene que ver con que en el apartado de nacionalidad por adopción se utiliza la expresión “Latinoamericanos y del Caribe” que entra a remplazar la expresión hispanoamericanos contenida en la Constitución de 1886, lo que ha sido calificado como aventajado en primer lugar por cuanto esta última expresión era mucho más restringida en el entendido que excluía a los nacionales de algunos países caribeños, pero también porque resulta armónica respecto del contenido del artículo 227 ídem, por medio del cual el Estado Colombiano funda sus responsabilidades en materia de política exterior, en el deber de promover la integración económica, social y política con las demás naciones “especialmente” con los que hacen parte de América Latina y el Caribe (Henao, 2013).

Es importante destacar que los nacionales colombianos, ya sea por nacimiento o por adopción, gozan de los mismos derechos que otorga la Constitución, las leyes y la jurisprudencia, esta última entendida como fuente de reconocimiento de derechos; sin embargo, existen dos excepciones a

dicha regla: la primera consiste en que los nacionales por nacimiento solo pierden la nacionalidad por renuncia expresa, mientras que los nacionales por adopción la pueden por incurrir en delitos contra la existencia y la seguridad del Estado contemplados en el título XVII de la Ley 599 de 2000, artículos 455 y siguientes, así como los delitos contra el régimen constitucional y legal contemplados en el título XVIII de la norma ídem.

La segunda excepción consiste en que los nacionales por adopción, siguiendo lo normado en el numeral 7° del artículo 40 de la misma Norma Rectora no cuentan con el derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (Constitución Política, 1991) de modo que, por disposición constitucional (artículos 172, 192, 204, 232, 249, 255, 264, 266, 267, 272 y 280), no pueden acceder a las investiduras de Presidente o Vicepresidente de la República, Senador, Magistrado de las altas cortes y del Consejo Superior de la Judicatura, Fiscal General, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil, Contralor (general, departamental o distrital), Procurador General de la Nación y agente del Ministerio Público. Es importante destacar que el cargo de Representante a la Cámara no tendría esta restricción pues el artículo 177 superior solo exige ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años.

### **1.1.3. El desarrollo legislativo de la adquisición de la nacionalidad en Colombia**

En armonía con el marco constitucional anteriormente mencionado se ha diseñado por parte del poder legislativo el marco legal específico que estructura la temática de la nacionalidad en el país. La primera de dichas normas corresponde a la Ley 43 de 1993 en la cual se reglaron aspectos como los requisitos para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, a prueba de la nacionalidad, la definición y la competencia en lo relacionado con la nacionalidad colombiana por adopción y los requisitos para adquirirla, aspectos relacionados con la doble nacionalidad y la pérdida de este atributo de la personalidad.

Respecto a la nacionalidad por adopción, el mencionado cuerpo normativo en su artículo 4° recuerda que la naturalización, como acto soberano, se encuentra sujeto a la discrecionalidad del Jefe de Estado quien, según el mismo artículo, solo puede delegar estas funciones en el Ministro de Relaciones Exteriores, siendo esto concordante con el contenido del numeral 28 del artículo 189 de la Constitución que faculta al Presidente de la República para expedir las cartas de naturalización requeridas para adquirir la nacionalidad en esta modalidad.



El requisito que los extranjeros deben cumplir para acceder a la mencionada carta de naturalización se encuentran contemplados en el artículo 5° de la misma norma en el que se indica que estos deben haber estado domiciliados en forma continua en el país durante por lo menos los cinco años previos a la presentación de la solicitud, término que se reduce a dos años en el caso de los extranjeros que tengan vínculo matrimonial o sean compañeros permanentes de un nacional colombiano, o cuando tengan hijos colombianos (Congreso de la República, Ley 43 de 1993).

Respecto al mencionado requerimiento de domicilio se deben tener en cuenta aspectos como los términos y la discrecionalidad que la ley le otorga al respecto al ejecutivo. En cuanto al primer aspecto, el parágrafo 2° del mismo artículo 5° aclara que los términos de domicilio empiezan a contar desde el momento en que el Gobierno Nacional expide la Visa de Residente; así mismo, el artículo 6° explica que cuando la persona se ausenta del territorio nacional por un lapso igual o superior a un año se interrumpe el término de domicilio requerido para obtener la carta de naturalización; no obstante, en el inciso siguiente, faculta al Presidente de la República para que, con la firma del Ministro de Relaciones Exteriores u por razones de conveniencia para el país, reduzca o exonere el término de domicilio exigido para obtener la carta de naturalización (Ley 43, 1993). Es importante destacar que la Ley 43 de 1993 ha tenido una serie de modificaciones las cuales se mencionan a continuación con el fin de escribir la evolución que ha tenido este cuerpo normativo.

La primera modificación se da con la expedición del Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995 por medio del cual el Gobierno Nacional suprimió y reformó regulaciones, procedimientos o trámites que se consideraron innecesarios para el adecuado desarrollo de la Administración Pública. En el artículo 77 de este Decreto se reformó el término máximo de permanencia fuera del país permitido para que no se interrumpiera el domicilio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 43 de 1993. Así, mientras la redacción original establecía que la ausencia del país por un lapso de tres meses al año no interrumpía el domicilio, el Decreto 2150 de 1995 amplió a cinco meses consecutivos dicho término. Este Decreto también modificó la Ley 43 de 1993 en su artículo 8°, numerales 2°, 7°, 9° 10° del artículo 9°, y los artículo 13 y 14 a los cuales les incluyó sendos párrafos. Dichos cambios se pueden apreciar en la siguiente tabla:

**Tabla 2.** Modificaciones a la Ley 43 de 1993 contenidas en el Decreto 2150 de 1995

REDACCIÓN ORIGINAL LEY 43 DE 1993	MODIFICACIÓN DECRETO 2150 DE 1995
<p><b>Artículo 6.</b> La ausencia de Colombia por un período de <u>tres meses al año</u>, no interrumpe los períodos de domicilio continuo exigidos en el artículo anterior.</p> <p>Únicamente el Presidente de la República con la firma del Ministro de relaciones Exteriores podrán reducir el término de que habla el literal a) del artículo anterior cuando a su juicio se considere de conveniencia para Colombia, el otorgamiento de carta de naturaleza a extranjeros que efectúan aportes significativos al progreso económico, científico, social o cultural de la Nación.</p>	<p><b>Artículo 6.</b> La ausencia de Colombia por un término consecutivo de <u>cinco (5) meses al año</u>, no interrumpe los períodos de domicilio continuo exigidos en el artículo anterior.</p> <p>Únicamente el Presidente de la República con la firma del Ministro de Relaciones Exteriores podrá reducir o exonerar el término de domicilio previsto en los literales <u>a), b) y c)</u> del artículo anterior, cuando a su juicio se considere de conveniencia para Colombia. <u>Así mismo, podrá eximir de la presentación de los requisitos señalados en los numerales 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 11 referentes a la documentación de que trata el reformado artículo 9 de la Ley 43 de 1993".</u></p>
<p><b>Artículo 8.</b> Las solicitudes de carta de naturaleza se presentarán ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o las Gobernaciones. Las solicitudes de inscripción de latinoamericanos y del Caribe por nacimiento se formularán ante las Alcaldías de sus respectivos domicilios. Las solicitudes que no se presenten ante el Ministerio de Relaciones Exteriores serán remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores para su decisión.</p>	<p><b>Artículo 8.</b> Las solicitudes de Carta de Naturaleza se presentarán ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o las Gobernaciones. Las solicitudes de inscripción de Latinoamericanos y del Caribe por Nacimiento se formularán ante las alcaldías de sus respectivos domicilios <u>o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.</u> Las solicitudes presentadas ante las Gobernaciones o las Alcaldías, serán remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores para su decisión.</p>
<p><b>Artículo 9.</b> Para la expedición de la Carta de Naturaleza o Resolución de Inscripción como colombianos por adopción, el extranjero deberá presentar los siguientes documentos: (...)</p> <p>2. Acreditar ausencia de antecedentes penales u órdenes de captura o aprehensiones vigentes, provenientes de autoridades competentes, en el país de origen o en aquellos donde hubiere estado domiciliado durante los últimos 5 años. Se exceptúan de este requisito quienes hayan ingresado al país siendo menores de edad.</p> <p>7. Fotocopia autenticada de la cédula de extranjería vigente.</p>	<p>Artículo 9. (...)</p> <p>2. Acreditar ausencia de antecedentes penales provenientes de autoridades competentes, en el país de origen o en aquellos de donde hubiere estado domiciliado durante los últimos cinco (5) años antes de su ingreso a Colombia. Se exceptúan de este requisito a quienes hayan ingresado al país siendo menores de edad <u>y quienes a la fecha de la presentación de la solicitud tengan diez (10) años o más de domicilio continuo en Colombia.</u></p> <p><u>7. Acreditar mediante documento idóneo el lugar y fecha de nacimiento del solicitante.</u></p> <p><u>9. Registro civil de Matrimonio válido en Colombia en caso de que el solicitante sea casado (a) con colombiana (o).</u></p> <p><u>10. Registro de nacimiento de los hijos en Colombia, si es el caso.</u></p>
<p><b>Artículo 13. Juramento y promesa de cumplir la constitución y la ley.</b> Recibida por la respectiva Gobernación la Carta de Naturaleza o por la Alcaldía la copia de la resolución de autorización, el Gobernador, o el Alcalde, procederá a citar al interesado para la práctica del juramento e inscripción.</p> <p>En dichas diligencias se requerirán la presencia del Gobernador o del Alcalde, y, la del interesado. El peticionario jurará o protestará solemnemente, si su religión no le permite jurar, que como colombiano por adopción se someterá y obedecerá fielmente la Constitución y las leyes de la República de Colombia.</p>	<p>Artículo 13°. (...) <u>Parágrafo. En caso de conveniencia Nacional, el juramento podrá ser tomado por el Presidente de la República o el Ministro de Relaciones Exteriores".</u></p>
<p><b>Artículo 14.</b> Los nacionales por adopción no están obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o de adopción.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Si el nacionalizado está interesado en renunciar a su nacionalidad de origen o de adopción el Gobernador, o el Alcalde, dejará constancia de este hecho en el Acto de Juramento.</p>	<p><b>Artículo 14.</b> Los Nacionales por adopción no están obligados a renunciar a su Nacionalidad de origen o de adopción.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Si el nacionalizado está interesado en renunciar a su Nacionalidad de origen o de adopción, el Gobernador o el Alcalde, <u>así como el Presidente o el Ministro de Relaciones Exteriores dejará constancia de este hecho en el acto de juramento.</u></p>

Fuente. Elaboración Propia con base en la Ley 43 de 1993 y el Decreto 2150 de 1995

En el año de 1999 se expide el Decreto 1122, también con el propósito de suprimir trámites en la Administración Pública, entre ellos algunos contenidos en la Ley 43 de 1993 como los relacionados con la prueba de la nacionalidad (artículo 3°), los requisitos para adquirir la nacionalidad (artículo 5°), la interrupción del domicilio (artículo 6°), la documentación requerida para la expedición de la Carta de Naturaleza y el informe sobre el solicitante (artículo 10°). No obstante, la vigencia de estos cambios fue efímera ya que mediante Sentencia C-923 de 1999 se dispuso la inexecutableidad de esta norma debido a la inconstitucionalidad consecuencial en que incurrió el mismo teniendo en cuenta que las facultades extraordinarias bajo las cuales fue promulgado, contempladas en el artículo 120 del Ley 489 de 1998 fueron declaradas inexecutables mediante Sentencia C-702 de 1999.

Lo propio ocurrió con el Decreto 266 del 22 de febrero de 2000 contentivo de reformas análogas, entre las cuales se destacó el incremento en el tiempo de ausencia del país requerido para interrumpir el domicilio, el cual sería, a partir de entonces de un (01) año. No obstante, mediante Sentencia C-1316 de 2000 se declaró inexecutable el numeral 5° de la Ley 573 de 2000 por medio de la cual se declaró inexecutable el numeral 5° del artículo 1° de la Ley 573 de 2000 que concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para suprimir o reformar regulaciones, trámites y procedimientos relacionados con lo que en su momento se dispuso en el Decreto 1122 de 1999, lo que se tradujo en la declaratoria de inexecutableidad del Decreto 266 de 2000, pues, como lo advirtió nuevamente la Corte Constitucional, si la ley que confiere atribuciones legislativas es inconstitucional, dicha irregularidad recae también sobre los decretos expedidos con fundamento en las mismas (Sentencia C-1316 de 2000, 2000).

Más adelante entra en vigencia el Decreto 286 de 1993, sin embargo sus efectos solo se dirigieron a la corrección de yerros contenidos en la redacción final de la Ley 43 de 1993, entre los cuales se encontraban los artículos superiores citados en los numerales 1°, 4° y 6° del artículo 28 (que correspondían a los artículos 249 y 267 respectivamente) y el artículo 38 ídem en el que se indicaba como derogada la Ley 145 de 1888 cuando el año real de la norma objeto de dicho pronunciamiento databa de 1888.

Los cambios sustanciales y claramente más relacionados con el presente trabajo según se profundizará más adelante, fueron dispuestos mediante la Ley 1997 de 2019, norma que adicionó un párrafo al artículo 2° de la Ley 43 de 1993 indicando en el mismo que de manera excepcional

se debía presumir la residencia y el ánimo de permanencia en el país de las personas venezolanas en situación migratoria, ya fuese regular o irregular, o también la de los solicitantes de refugio “cuyos hijos e hijas hayan nacido en territorio colombiano desde el 1° de enero de 2015 y hasta dos años después de la promulgación de esta ley” (Ley 1997, 2019).

Por último ha de mencionarse el Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019 cuyo propósito nuevamente es el de dictar normas para reformar, suprimir y simplificar procedimientos, procesos y trámites innecesarios de la administración pública. Este Decreto también surge de las facultades extraordinarias que el legislativo le concedió al Presidente de la República, en esta oportunidad mediante el artículo 33 de la Ley 1955 de 2019.

Respecto a la Ley 43 de 1993, los cambios se traducen en la modificación del artículo 9bis el cual, en su redacción original delegaba al Comité de Evaluación (integrado por el Secretario de Educación de cada departamento y un Profesor de castellano de la más alta categoría del escalafón) la práctica de los exámenes de conocimiento requeridos para otorgar la Carta de Naturaleza o Resolución de Inscripción como colombianos por adopción a los extranjeros que así lo solicitaron. Mediante el nuevo Decreto se dispuso que los parámetros y la metodología para la elaboración, práctica y calificación de los exámenes de conocimiento de idioma, historia patria, Constitución Política y geografía del país, deberían ser definidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo y la asesoría de la entidad o institución técnica correspondiente (se entiende, el Ministerio de Educación Nacional o el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior).

También se añadió, mediante este Decreto, un cuarto párrafo al artículo 25 de la Ley 43, por medio del cual se estableció que las personas que hubiesen perdido la nacionalidad como consecuencia de la aplicación del artículo 9° de la Constitución Política de 1886 (por adquirir carta de naturaleza en país extranjero y fijar allí el domicilio) y cuya cédula se encontrara vigente en el Archivo Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional, no requerirían adelantar trámite alguno para recuperar la nacionalidad colombiana (Decreto 2106, 2019).

## **1.2. La nacionalidad desde el Derecho Internacional**

En el Derecho Internacional Público, el concepto de nacionalidad se encuentra estrechamente ligado al concepto de jurisdicción personal que es aquella que ofrece los fundamentos para el reconocimiento del poder reglamentario del Estado sobre cada uno de sus nacionales y en una

medida más limitada, sobre los extranjeros que se encuentran en el respectivo territorio. Esta es la razón por la cual los Estados pueden, atendiendo ciertas limitantes jurídicas, reglamentar la conducta de sus nacionales incluso en el evento en que estos se encuentren fuera del territorio, aclarando que en el caso de las personas que cuentan con una doble nacionalidad, predomina el poder estatal efectivo que por regla general corresponde al lugar en el que las personas tienen fijada su residencia de manera permanente (Herdeggen, 2012).

El mismo doctrinante explica que de acuerdo con las reglas del derecho internacional consuetudinario, la nacionalidad, además de constituir el presupuesto para que los Estados organicen las responsabilidades individuales relacionadas con el servicio militar obligatorio, constituye el argumento para (i) que cada Estado pueda, en principio, ejercer la protección diplomática solo respecto de sus propios nacionales y no respecto de personas extranjeras; y (ii) que los Estados no puedan desterrar a sus propios nacionales en aquellos eventos en los que ningún otro Estado se encuentra dispuesto a recibirlo.

Pero no solo es la costumbre la que ha construido las reglas sobre la nacionalidad en el escenario internacional, por el contrario, son diversos los instrumentos internacionales que han hecho de la nacionalidad un derecho humano básico. Puede considerarse que el punto de partida en este sentido corresponde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que en su artículo 15 estableció que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie sería privado de la misma ni del derecho a cambiar dicho vínculo jurídico con el Estado que fuese de su elección (Naciones Unidas, 1948), con lo cual se establece no solo la nacionalidad como un derecho de la persona humana sino que se le reconoce un amplio margen de autonomía para cambiar de nacionalidad cuando así lo considere pertinente.

Lo anterior fue ratificado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre adoptada en la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, evento altamente ligado a la historia contemporánea de Colombia. El artículo 19 de esta Carta ratifica que toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda, añadiendo además que le asiste el derecho a cambiarla por la de cualquier otro Estado que se encuentre dispuesto a otorgársela cuando así lo desee cada individuo (CIDH, 1948).

En la segunda mitad del siglo XX empiezan a tomar más fuerza los derechos de los niños, entre ellos, su derecho a la nacionalidad. Si bien previamente se habían diseñado instrumentos como la

Declaración sobre Derechos de los Niños o Declaración de Ginebra adoptada por la Liga de las Naciones en el año de 1924 e incluso se les mencionaban en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 25). Para algunos autores, el contenido de estos instrumentos si bien representaban avances jurídicos a favor de la niñez, no contenían en forma expresa derechos a favor de los menores de edad sino que establecían obligaciones para los adultos con lo que el niño continuaba siendo un objeto de protección que no un sujeto de derechos (Rea, 2016).

Lo anterior empieza a cambiar mediante la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 que en su artículo 3° establece como principio que todo niño, desde su nacimiento, tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad (ONU, 1959). A ello se suma el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado mediante Resolución 2200 A del 16 de diciembre de 1966 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, instrumento que en el numeral 3° de su artículo 24 indica expresamente que “todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad” (Naciones Unidas, 1966).

Mayor fuerza y claridad como derecho resulta del contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 44/25 del 20 de Noviembre de 1989, instrumento que aclara que se debe entender por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad (artículo 1°), disponiendo en su artículo 7° que todo niño debe ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y que a partir de dicho hecho jurídico adquiere el derecho a un nombre y a una nacionalidad (numeral 1°); así mismo, conmina a los Estados a velar por la aplicación de dichos derechos de acuerdo a su legislación interna y de las obligaciones derivadas de su respectivo Bloque de Constitucionalidad especialmente en aquellos casos en que el niño corre el riesgo de verse expuesto al fenómeno de la apatridia (numeral 2°), e incluso a prestar asistencia y protección con propósitos de restablecimiento cuando los niños sean privados ilegalmente de algunos o todos los elementos de su identidad (artículo 8° numeral 2°) entre los cuales se encuentra precisamente el de la nacionalidad (ONU, 1989).

Relacionado directamente con la nacionalidad como derecho humano es el fenómeno de apatridia que tiene connotaciones negativas tanto para las personas que se encuentran en dicha condición por la exposición permanente a circunstancias de discriminación y la pérdida consecuente de derechos políticos económicos y sociales; del mismo modo, para los Estados en la medida que el gobierno de una sociedad es mucho más complejo cuando se presentan

circunstancias de informalidad e irregularidad respecto al status de las personas (Moreno, Pelacani, & Amaya, 2020).

Se trata de una problemática humana de orden global cuya magnitud empieza a dimensionarse casi una década después de que se culminara la segunda guerra mundial y que se exacerba tras la disolución de la unión soviética (ACNUR, 2016). La Asamblea General de las Naciones Unidas, en procura de atender este creciente fenómeno convocó en 1951 a una Conferencia de Plenipotenciarios con el fin de redactar un tratado internacional sobre personas apátridas y refugiados, posterior a lo cual se da la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas que es adoptada el 28 de septiembre de 1954 teniendo como contribución más significativa el que se hubiese presentado ante la comunidad internacional una definición consensuada de “apátrida” indicando que adquiriría dicha denominación toda persona “que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación” (UNHCR, 1954).

## **2. La Ley 1997 y sus falencias en la protección de derechos fundamentales**

El 5 de agosto de 2019, la Registraduría General de la Nación profirió la Resolución 8470 por medio de la cual se adoptaron medidas administrativas de carácter temporal y excepcional para incluir de manera oficiosa, la nota “Válido para demostrar nacionalidad” en los registros civiles de nacimientos de niños y niñas nacidos en el país que se encontraran en circunstancias de riesgo de apatridia, concretamente los hijos de padres venezolanos que no cumplieran con el requisito de domicilio requerido para el otorgamiento de la nacionalidad, acto administrativo que incluyó en su parte motiva aspectos como el deber de reconocer el derecho a la personalidad jurídica contemplado en el artículo 14 superior consonante con normas de Derecho Internacional como el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como al prevalencia de los derechos de los niños y niñas atendida al tenor del artículo 44 ídem (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2019).

Es así como el organismo registral colombiano dispuso que las oficinas con función registral incluyeran de oficio dicha nota en los registros civiles mencionados que se hubiesen otorgado desde el 19 de agosto de 2015 (artículo 2°), requiriendo para el efecto que los dos padres del menor fuesen de nacionalidad venezolana o que solo pareciera uno de los padres en el registro civil y que éste fuese de dicha nacionalidad (artículo 4°) la cual sería soportada mediante cualquiera de los siguientes cuatro documentos: (i) cédula de extranjería vigente, (ii) Permiso Especial de

Permanencia vigente, (iii) pasaporte expedido por la República Bolivariana de Venezuela (vigente o vencido) o (iv) cédula de identidad expedida por dicha nación (vigente o vencida).

Es evidente el buen propósito de esta medida que claramente busca acercar más al infante nacido en Colombia de ascendencia venezolana, a los derechos que la Constitución Colombiana le otorga a todos los niños y niñas que hacen parte de su población. No obstante, existen al menos tres puntos que generan crítica respecto de la medida: (i) la vigencia temporal de este acto administrativo, (ii) el que se restrinja solo a ciudadanos venezolanos y (iii) el que no se permita adelantar dicho trámite en consulados colombianos (Moreno et al, 2020).

Respecto al primer aspecto, los autores citados consideran que la vigencia temporal de la medida (19 de agosto de 2015) elimina las posibilidades de acceso a este beneficio de menores que se encuentran en iguales condiciones de vulnerabilidad llegados al país antes de dicha fecha; respecto a la nacionalidad, la crítica se fundamenta en que no solo son ciudadanos venezolanos los que se encuentran en condición de migrantes producto de la crisis económica, social y política que se presenta en dicho país; por último, respecto a que no se permita adelantar estos trámites en consulados colombianos en el exterior, la crítica tendría razón de ser en el hecho de la continua movilidad que, producto de la misma necesidad, realizan los migrantes venezolanos hacia otros países, especialmente en Suramérica, lo debería constituirse en un argumento para que no se realizara dicho trámite en las misiones diplomáticas ubicadas en países vecinos.

La razón por la que se trae a colación el anterior acto administrativo en el presente apartado corresponde a que precisamente los criterios expuestos en precedencia terminan replicándose en la Ley 1997 de 2019 expedida por el Congreso de la República dos meses después de que se proferiera el referido acto administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y por medio de la cual se dispuso la modificación del artículo 2° de la Ley 43 de 1993, añadiéndole un párrafo en el que se dispuso que, de manera excepcional se presumiría la residencia y ánimo de permanencia en Colombia de las personas de origen venezolano en situación migratoria (regular o irregular) como también a los solicitantes de refugio procedentes de dicho país, cuyos hijos e hijas naciesen en el territorio de Colombia (Ley 1997, 2019).

En la exposición de motivos de dicha norma se hace referencia a las indicaciones de la Defensoría del Pueblo respecto al incremento en el riesgo de apatridia de los hijos de padres venezolanos en condición de migrantes, al tiempo que se puso de presente las medidas transitorias



que debió tomar el gobierno en aspectos como el acceso a la educación de los menores integrantes de dicha población, las disposiciones jurisprudenciales que dispusieron el carácter obligatorio de la atención en salud en casos de urgencia al tiempo que limitaban el acceso a otros servicios hasta tanto no se regularizara su situación migratoria, entre otros aspectos que llevaron a colegir que solo mediante la adquisición de la nacionalidad constituiría la única solución para que estas personas, y en especial los niños, niñas y adolescentes, contaran con un acceso integral al abanico de derechos fundamentales reconocidos en la Norma Rectora y el Bloque de Constitucionalidad (Gaceta del Congreso, 2019).

Pese a lo altruista de dicha reforma, la misma presenta falencias entre las cuales se puede citar el hecho de que no se haya generado aún, por parte del mismo legislativo, una norma que reglamente con de manera rigurosa e inequívoca, la manera en que las autoridades administrativas encargadas de la materialización de los efectos de dicha presunción llevarían a cabo su aplicación, circunstancia que constituye un obstáculo para su oportuna y ágil aplicación, que es precisamente lo que se requiere en los eventos en los que se encuentran en riesgos los derechos fundamentales de un menor.

Llama la atención también, el que no se de una consonancia entre el contenido de la Ley y el contenido del acto administrativo expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Mientras esta última entidad dispuso que la medida transitoria de incluir, de manera oficiosa la nota de “valido para demostrar nacionalidad” regiría a partir del 19 de agosto de 2015, la Ley 1997 dispone la presunción desde el 1 de enero del 2015, circunstancia que podría derivar en confusión para los funcionarios encargados de hacer cumplir una y otra disposición, pero además, para los ciudadanos que requiriesen acceder a los efectos de las mismas, circunstancia que ya ha sido advertida por autores como Moreno et al (2020) quienes a manera de ejemplo plantean el caso de menores nacidos entre el 1° de enero y el 18 de agosto de 2019 a quienes no cobijaría el beneficio contemplado en la Resolución 8470 de 2019 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero además, tampoco la tendrían fácil respecto a la aplicación de la Ley 1997 por la ya referida ausencia de reglamentación.

Lo anterior podría reflejar además que una y otra entidad (tanto la Registraduría como el Congreso de la República), están limitando los efectos de sus respectivas medidas, amparándose en criterios temporales que no se compadecen con la realidad de la población vulnerable que las

mismas pretenden proteger o acercar a sus derechos pues claramente se trata de una problemática difícil de ubicar en el tiempo, por lo menos de una manera tan rigurosa como lo hace este acto administrativo y la Ley 1997 de 2019.

Como sustento de esto, debe tenerse en cuenta que en el caso de la disposición de la Registraduría General de la Nación, el límite temporal tuvo como fundamento, según la parte motiva del mismo, el contenido del Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015 por medio del cual el Presidente de la República, a la sazón Juan Manuel Santos Calderón, declaró el Estado de Emergencia Económica Social en varios municipios ubicados en los departamentos que comparten frontera con Venezuela como son la Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía, medida que se sustentó en que el Gobierno Venezolano ordenó el cierre de la frontera en el Puente Internacional Simón Bolívar que comunica el municipio de San Antonio del Táchira con la ciudad de Cúcuta, medida tomada, precisamente el 19 de agosto de 2015. Se evidencia entonces que las limitaciones del tiempo tienen como sustento hechos políticos concretos que no, como debería ser, la realidad humanitaria que ha tenido que afrontar la población migrante venezolana que claramente no se puede circunscribir a dicha fecha.

Todo lo anteriormente expuesto puede tener efectos negativos a la hora de materializar derechos en perjuicio que corresponden a verdaderas necesidades humanas, de una población que como se describirá en el siguiente apartado, no debería estar limitada para acceder a prerrogativas legales y constitucionales con fundamento en calificaciones rigurosas de tiempo o espacio, sino que por el contrario, deberían ser objeto del privilegio de un sentido de solidaridad y empatía mucho más amplia, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de la protección de derechos fundamentales de los niños y niñas, los cuales como lo dispone el ordenamiento superior, tienen un carácter de prevalencia tan amplio que superan las proyecciones y los análisis políticos.

## **2.1. Caracterización de la migración venezolana en el siglo XXI**

Lo primero que hay que señalar es que es equivocado pensar que la crisis humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela se puede caracterizar partiendo de la idea según la cual el origen de este proceso se ubica en el año 2015, cuando existen registros que ubican problemáticas sociales serias en este país desde finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI que empiezan a hacerse visible a nivel internacional en el año 2013 tras el ascenso al poder de quien hasta ahora es el jefe de Estado Nicolás Maduro (Romero, 2013).

Ahora bien, lo que sí es claro es que desde el año 2015 se exacerbó el flujo migratorio de ciudadanos procedentes de la República Bolivariana de Venezuela hacia Colombia ya sea con la intención de ubicarse en el país o con el fin de iniciar el tránsito hacia otras naciones de Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Dicha circunstancia una reversión en materia de movilidad humana en Colombia, país que históricamente ha tenido altos niveles de emigración de sus nacionales, los cuales tenían en Venezuela uno de sus principales destinos merced a las oportunidades laborales que brindaba este país gracias a factores como la bonanza petrolera que allí se experimentó desde inicios de la década de los 80.

Este revés ha obedecido según fuentes oficiales a la inestabilidad política, institucional y económica que además del deterioro de las finanzas públicas, ocasionó la pérdida sustancial de las capacidades estatales para proveer servicios como el de la salud, renglón en el que el país vecino tuvo un retroceso significativo que se describe a partir del rebrote de enfermedades que se consideraban erradicadas como el paludismo y la tuberculosis (Grupo Banco Mundial, 2018).

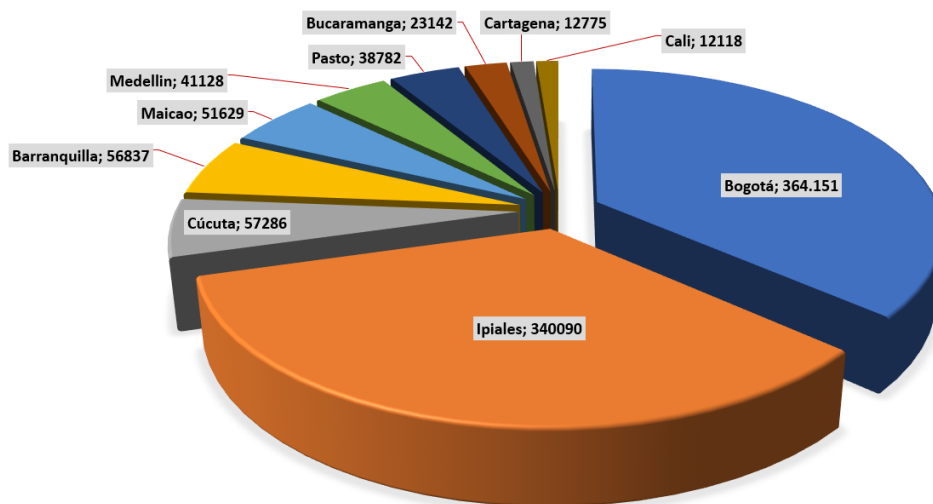
De acuerdo a la mencionada organización internacional, para el año 2018, ingresaron a Colombia desde Venezuela, con vocación de permanencia, alrededor de 1.235.593 entre los cuales se encontraban 300 mil colombianos en retorno, 468.428 ciudadanos venezolanos con estatus migratorio regular, 361.399 en proceso de regularización y un estimado de más de 100.000 en circunstancia de irregularidad (Grupo Banco Mundial, 2018, pág. 15). El mismo organismo añadió que de acuerdo a los estimados, uno de los derechos que más se ve en riesgo en virtud de dicha dinámica corresponde al de la educación ya que los estimados para la fecha daban cuenta de la presencia en Colombia de al menos 513 mil migrantes venezolanos en edad escolar ya que el 38% de esta población se encuentra en el rango de edad de 0 a 18 años (Grupo Banco Mundial, 2018).

Dentro de las regiones que se consideran protagonistas en este fenómeno se encuentra la que corresponde al nororiente Colombiano integrada por los departamentos de Norte de Santander, Santander y Arauca. En dicho espacio geográfico se identificaron entre el 2014 al 2018, problemáticas sociales de gran magnitud como las relacionadas en materia de derechos humanos evidenciadas especialmente en el caso de las comunas 3,4, 6 y 7 de la ciudad de Cúcuta que incluyen dificultades en el acceso a servicios públicos y sanitarios, servicio de educación para menores, explotación laboral y sexual, todo ello en un contexto en el que los grupos familiares de los migrantes venezolanos que en esta región del país se caracteriza por ser mixtos (conformados

por ciudadanos venezolanos de nacimiento y nacionales colombianos en condición de retorno), se ven expuestos en la mayoría de los casos, a factores de riesgo que afectan primordialmente a los niños, niñas y adolescentes tales como la falta de protección en temas de seguridad alimentaria y nutrición y acceso a servicios de educación y salud (Ramírez et al, 2019).

La región sur de Colombia (Nariño y Putumayo), también ha tenido un papel relevante en relación al fenómeno migratorio venezolano en Colombia, no como destino de asentamiento sino como sector de tránsito, por esta razón el municipio de Ipiales Nariño con 364.151 personas movilizándose hacia allí, ha llegado a ser el segundo destino interno de migrantes venezolanos superado solo por Bogotá que registró 340.090 personas dirigiéndose hacia allí (Migración Colombia, 2018), cifras que concuerdan con los registros de los puestos de control migratorio ubicados en Rumichaca, Chiles y Tumaco en el Departamento de Nariño, así como los controles de Puerto Leguizamo y San Miguel en el departamento del Putumayo en los que se pasó de registrar el ingreso y la salida de 42.806 migrantes venezolanos en el año 2016 a 264.368 en 2017 y 581.316 en el año 2018 con lo cual, este grupo poblacional corresponde al 82,59% de la población humana que se moviliza por las mencionadas fronteras terrestres (Goyes et al, 2019).

**Gráfico 2.** Principales destinos internos de migrantes venezolanos (Enero - Septiembre 2018)



Fuente. Elaboración propia a partir de las cifras de Migración Colombia Base de Datos Platinum

En el caso del Distrito Capital, los estudios de caracterización han indicado (i) que la población migrante de origen venezolano ubicada en la ciudad de Bogotá proviene principalmente de los estados de Zulia, Carabobo y Caracas; así mismo; (ii) que las principales razones por las cuales

han migrado de su país son laborales o económicas (69,5%), imposibilidad de acceder a fuentes de satisfacción de necesidades elementales (18,6%), violaciones a los derechos humanos (4,2%), razones de orden político (3,2%) y factores de riesgo en materia de seguridad (2,3%); (iii) que el 77% de los migrantes que se encuentran en la ciudad tienen vocación de permanencia por contar con mayores oportunidades laborales, por relaciones familiares o personales y porque es esta le metrópoli en la que más cercanía tiene con personas de su mismo origen (Torres et al, 2019).

Dicho incremento poblacional también se ha identificado gracias al contraste entre los censos de los años 2005 y 2018. De acuerdo a dicho análisis, para el año 2005 Bogotá y los municipios vecinos contaban con una población de 7.716.089 personas de las cuales el 0,4% (31.696) no habían nacido en el país. Para el 2018, la misma franja territorial contaba con 8.900.000 habitantes de los cuales el 4,8% corresponden a migrantes de origen venezolano (Universidad del Rosario - Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 2020, pág. 6). Buena parte de dicha población, según el mismo observatorio, se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad que afectan principalmente a los menores de edad entre las cuales se destacan el asentamiento sobrepoblado en paga-diaros o inquilinatos (especialmente en el suroccidente y centro de la ciudad), mercados informales y economías colaborativas impulsadas a través de las redes sociales con precarias garantías laborales, comportamientos xenófobos y aporofóbicos (rechazo originado en la condición de pobreza) y cooptación por parte de redes criminales dedicadas al control de la prostitución y trata de personas.

Dentro de los factores que exacerban estas circunstancias de vulnerabilidad en la ciudad de Bogotá se encuentra por un lado el relacionado con la regularización a partir de la obtención de los documentos requeridos para dicho efecto (cartas de naturalización y permisos especiales de permanencia), circunstancia que desemboca en inseguridad jurídica, dificultades de acceso igualitario a los derechos fundamentales y formalización laboral (Torres et al, 2019); del mismo modo, la crisis sanitaria derivada de la pandemia mundial por Coronavirus Covid 19 que incrementó las necesidades de la población venezolana asentada en la capital de la República contexto que dio lugar a la creación del proyecto de inversión 7730 “Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos” el cual se puso en marcha en la ciudad desde junio del año 2020 por medio del cual se disminuir los índices de vulnerabilidad social originados en esta nueva realidad (Secretaría de Integración Social Bogotá, 2021).

El incremento en la vulnerabilidad y las dificultades sociales de esta población con ocasión de la actual coyuntura de pandemia también ha sido registrado por entes internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA). De acuerdo a dicho organismo, antes de la pandemia, diariamente salían de Venezuela un aproximado de 5.000 personas, dinámica que se modificó debido al confinamiento obligatorio regional pero no porque se haya detenido sino por la modificación en las rutas de salida que tras la pandemia se da principalmente por trochas o pasos irregulares, circunstancia que ha generado consecuencias fatales como la muerte de 33 venezolanos que fallecieron en un naufragio ocurrido entre la frontera marítima que separa a Trinidad y Tobago de Venezuela (OEA, 2020).

### **3. Conclusiones del análisis**

Tras haber realizado el presente análisis se logró identificar que el contenido de la Ley 1997 presenta dos falencias que afectan su propósito de protección de derechos fundamentales como el reconocimiento a la personería jurídica de los infantes venezolanos nacidos en Colombia, como son, los aspectos relacionados con la vigencia (factor temporal de aplicación) y el contenido, esto último concentrado en la aplicación administrativa de la norma.

Respecto a la vigencia, se debe tener en cuenta es que la crisis humanitaria que ha venido afrontando la República Bolivariana de Venezuela no puede ubicarse de una manera tan rigurosa, es decir, no se puede señalar que los efectos de las dificultades sociales, económicas y políticas que presenta actualmente la población del vecino país haya encontrado su génesis en el año 2015, apreciación que resulta poco solidaria, especialmente con los menores de edad y con los niños y niñas que nacieron en el país en el marco de un proceso social que examinado a profundidad tiene un origen en años anteriores al indicado, más aún si se tiene en cuenta que tanto Colombia como Venezuela comparten una problemática de frontera mucho más extensa, que corresponde en concreto al conflicto armado Colombiano cuyos efectos no han dejado de impactar negativamente a los ciudadanos del vecino país, especialmente los ubicados en zona de frontera, incluso desde antes de que se exacerbara la problemática política del país vecino.

Desde esta óptica, y partiendo de la naturaleza de Estado Social de Derecho que tiene la República de Colombia, la recomendación sería eliminar la exigencia de vigencia que limita el acceso a la iniciativa legal a los menores nacidos en el país en el año 2015, suprimiéndola por un requerimiento documental que dé cuenta que el traslado de los padres al territorio colombiano

obedeció a problemáticas sociales, políticas o económicas que se presentaron en el territorio venezolano o en su defecto originadas en el conflicto interno colombiano, pues, como se acaba de indicar, no puede desconocerse el impacto que el conflicto armado colombiano ha tenido en las zonas de frontera especialmente en términos de desplazamiento y desarraigo.

Lo propio debería tenerse en cuenta respecto a la culminación de la vigencia, que de acuerdo a la Ley 1997 culmina dos años después de la promulgación de esta norma, es decir, el 16 de septiembre de 2021. Al respecto, es importante tener en cuenta que la realidad que enfrentan tanto Colombia como Venezuela, e incluso el mundo entero si se tiene en cuenta la pandemia por Coronavirus SAR II Covid 19 y sus recientes cepas derivadas, permiten prever que las dificultades que enfrentan los niños de ascendencia venezolana están muy lejos de terminar, de modo que nada más consecuente con la realidad que eliminar dicha limitación de vigencia.

Respecto al contenido del cuerpo normativo, como se mencionó en precedencia, la falencia puntual estriba en la ausencia de indicaciones reglamentarias claras que les permitan a los funcionarios y a las autoridades administrativas, la aplicación de la presunción legal que contempla la Ley 1997 de 2019, así mismo, a los ciudadanos que se crean en derecho de acudir a la misma, la materialización de un trámite expedito y ágil en procura de la protección de los derechos fundamentales de los menores.

De este modo, la norma debería incluir un catalogo claro sobre el procedimiento que se debería desarrollar, las autoridades que lo materializarían, entre las cuales se deberían incluir los integrantes de las misiones diplomáticas en países vecinos, esto último en reconocimiento a la movilidad permanente que llevan a cabo ciudadanos de origen venezolano que están en una permanente diáspora tratando, como es natural, de ubicar oportunidades laborales que mejoren sus condiciones de vida, sin que con ello se afecten sustancialmente los lapsos de permanencia en Colombia requeridos para a presunción de domicilio a la que hemos hecho referencia.

## **Referencias**

ACNUR. (2016). *Página Oficial Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas*. Recuperado el 27 de abril de 2021, de Los Apatridas del Mundo. Preguntas y respuestas: <https://www.refworld.org/es/pdfid/57f76e867.pdf>

ACNUR. (Diciembre de 2019). *Página Oficial Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados*. Recuperado el 21 de abril de 2021, de Nacionalidad y Apatridia - Rol del ACNUR:

<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/archivo/0173.pdf?view=1>

Bonil, A. (2019). Análisis de Política Pública de Recepción de Venezolanos en Colombia. En F. A. Castro, *Venezuela migra: aspectos sensibles del éxodo hacia Colombia* (págs. 87-121). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

CIDH. (1948). *Página oficial Organización de los Estados Americanos*. Recuperado el 25 de abril de 2021, de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp>

Constitución Política (Asamblea Constituyente 1886).

Constitución Política (Asamblea Nacional Constituyente 20 de Julio de 1991).

Decreto 1122 (Presidencia de la República Junio de 26 de 1999).

Decreto 2106 (Presidencia de la República 22 de noviembre de 2019).

Decreto 2150 (Presidencia de la República 5 de diciembre de 1995).

Decreto 286 (Presidencia de la República 10 de febrero de 1993).

Gaceta del Congreso. (1° de marzo de 2019). *Página oficial Congreso de la República*.

Recuperado el 29 de abril de 2021, de Exposición de motivos Proyecto de Ley número 230 de 2019 Senado:

[http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2019/gaceta\\_97.pdf](http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2019/gaceta_97.pdf)

Garavito, A. A., Collazos, G. M., Hernández, B. M., & Montes, U. E. (2019). Migración internacional y determinantes de las remesas de trabajadores en Colombia. (B. d. República, Ed.) *Borradores de Economía*(1066), 1-52. Recuperado el 20 de abril de 2021, de [https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9654/be\\_1066.pdf?sequence=5&isAllowed=y](https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9654/be_1066.pdf?sequence=5&isAllowed=y)



Goyes, M. I., Torres, B. C., & Delgado, S. L. (2019). Diagnóstico regional de la migración en el sur de Colombia. En S. M. Palacios, & T. B. Londoño, *Migración y Derechos Humanos: El caso colombiano, 2014-2018* (págs. 87-114). Bogotá D.C. : Universidad del Rosario.

Grupo Banco Mundial. (2018). *Migración desde Venezuela a Colombia*. Bogotá : Oficina del Banco Mundial para Colombia y Venezuela.

Henao, H. J. (2013). *Panorama del derecho constitucional colombiano*. Bogotá: Temis.

Herdeggen, M. (2012). *Derecho Internacional Público 5a Edición* . México: Fundación Konrad Adenauer.

Hernández, B. A. (2008). *Las ideas políticas en la Historia*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Hurtado, A. M. (julio de 2020). *Repositorio Universidad de la Rioja*. Recuperado el 7 de marzo de 2021, de Apoyo educativo del Estado colombiano a niños, niñas y adolescentes de origen venezolano: límites, oportunidades y argumentos:  
<https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/10630/Hurtado%20Alape%2c%20May.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ley 1997 (Congreso de la República 16 de septiembre de 2019).

Ley 43 (Congreso de la República 1 de Febrero de 1993).

Migración Colombia. (septiembre de 2018). *Página oficial Migración Colombia*. Recuperado el 29 de abril de 2021, de Base de datos Platinum Migración Colombia:  
<https://www.migracioncolombia.gov.co/subdireccion-de-control-migratorio/tag/Sistema%20PLATINUM>

Migración Colombia. (junio de 2020). *Página Oficial Migración Colombia*. Recuperado el 19 de abril de 2021, de Boletín anual de estadísticas de flujos migratorios 2019:  
[https://www.migracioncolombia.gov.co/documentos/estadisticas/publicaciones/Bolet%20Anual%20Estadistico%20Flujos%20Migratorios\\_2019.pdf](https://www.migracioncolombia.gov.co/documentos/estadisticas/publicaciones/Bolet%20Anual%20Estadistico%20Flujos%20Migratorios_2019.pdf)

Ministerio de Relaciones Exteriores. (2010). *Cartilla sobre nacionalidad colombiana*. Bogotá D.C. : Imprenta Nacional.

Moreno, V. C., Pelacani, G., & Amaya, C. J. (20 de Junio de 2020). *Repositorio Universidad de los Andes*. Recuperado el 26 de abril de 2021, de La apatridia en Colombia: fragmentos dispersos de una conversación pendiente:  
<https://derecho.uniandes.edu.co/sites/default/files/informe-cem-2020.pdf>

Naciones Unidas. (1948). *Página Oficial Naciones Unidas*. Recuperado el 25 de abril de 2021, de Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Naciones Unidas. (16 de diciembre de 1966). *Página Oficial Naciones Unidas - Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos*. Obtenido de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>

OEA. (Diciembre de 2020). *Página Oficial Organización de Estados Americanos*. Recuperado el 28 de abril de 2021, de Informe de Situación Diciembre 2020. Crisis de migrantes y refugiados venezolanos: [https://www.oas.org/fpdb/press/OEA\\_Dic20-crisis-de-migrantes-y-refugiados-venezolanos-informe-de-situacion.pdf](https://www.oas.org/fpdb/press/OEA_Dic20-crisis-de-migrantes-y-refugiados-venezolanos-informe-de-situacion.pdf)

ONU. (1959). *Página Oficial de la Organización de Estados Americanos*. Recuperado el 25 de abril de 2021, de Declaración de los Derechos del Niño:  
<https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica%20Dominicana.pdf>

ONU. (20 de noviembre de 1989). *Página oficial Organización de las Naciones Unidas*. Recuperado el 26 de abril de 2021, de Convención sobre los Derechos del Niño:  
<https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx>

Palacios, S. M., Londoño, T. B., & Lozano, A. A. (2019). Nuevas realidades de los flujos migratorios hacia Colombia. En S. M. Palacios, & T. B. Londoño, *Migración y Derechos Humanos: el caso colombiano, 2014 - 2018* (págs. 11-49). Bogotá: Universidad del Rosario.

Palma, U. I. (2009). *Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Recuperado el 24 de abril de 2021, de La negación del derecho a la nacionalidad y sus consecuencias. Una revisión de los casos presentados ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos:  
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/26566.pdf>

- Ramírez, P. C., Sepulveda, Y. Á., Herreño, C. D., & Sierra, G. E. (2019). Migración en el Nororiente Colombiano. En S. M. Palacios, & T. B. Londoño, *Migración y Derechos Humanos: El caso colombiano, 2014-2018* (págs. 57-85). Bogotá : Universidad del Rosario.
- Rea, G. S. (julio - diciembre de 2016). Evolución del Derecho Internacional sobre la infancia. *Revista Colombiana de Derecho Internacional*(29), 147-192. Recuperado el 26 de abril de 2021, de <http://www.scielo.org.co/pdf/ilrdi/n29/1692-8156-ilrdi-29-00147.pdf>
- Registraduría Nacional del Estado Civil. (05 de agosto de 2019). *Página Oficial Registraduría Nacional del Estado Civil*. Recuperado el 21 de abril de 2021, de [https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/resolucion\\_8470.pdf](https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/resolucion_8470.pdf)
- Rodríguez, V. M., Avila, H. F., & de los Santos, I. (Julio - Diciembre de 2020). Reflexiones sobre nacionalidad, apatridia y derechos de los niños. Análisis comparado entre Colombia y República Dominicana. *Novun Ius*, 14(2), 197-231. Recuperado el 3 de marzo de 2021, de <https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/3190/3428>
- Romero, C. A. (2013). La Revolución Bolivariana: Sinópsis de una permanente ambigüedad. (U. d. Rosario, Ed.) *Revista Desafíos*, 25(1), 15-43. Recuperado el 21 de Abril de 2021, de <https://www.redalyc.org/pdf/3596/359633173002.pdf>
- Secretaría de Integración Social Bogotá. (19 de marzo de 2021). *Página oficial Secretaría de Integración Social de Bogotá*. Obtenido de Integración Social fortalece la articulación con ACNUR para dar respuesta a población migrante, refugiada y retornada: <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/4369-integracion-social-fortalece-la-articulacion-con-acnur-para-dar-respuesta-a-poblacion-migrante-refugiada-y-retornada>
- Sentencia C-1316 de 2000, Expedientes D-2876 y D-2877 (acumulados) (Corte Constitucional (M.P. Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ) 26 de septiembre de 2000).
- Sentencia C-923, Expedientes D-2507, D-2512, D-2522, D-2530 y D-2531 (Acumulados) (Corte Constitucional (M.P. DR. Alvaro Tafur Galvis) 18 de noviembre de 1999).

- Soto, M. M. (2018). El derecho humano a la nacionalidad: perspectiva europea y latinoamericana. (U. d. Granada, Ed.) *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía Política, Humanidades y Relaciones Internacionales*, 20(40), 453-481.  
doi:10.12795/araucaria.2018.i40.21
- Torres, Villarreal María Lucía; Iregui, Parra Paola Marcela; Lozano, Amaya Alejandra . (2019). Una mirada a los derechos de la población migrante en el Distrito Capital: Retos de una creciente realidad. En S. M. Palacios, & T. B. Londoño, *Migración y Derechos Humanos: el caso Colombiano, 2014-2018* (págs. 199-229). Bogotá: Universidad del Rosario.
- UNHCR. (1954). *Pagina oficial Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados*. Recuperado el 27 de abril de 2021, de Convención sobre el Estatuto de los Apátridas: <https://www.acnur.org/5b43cea54.pdf>
- Universidad del Rosario - Fundación Konrad Adenauer Stiftung. (Agosto de 2020). *Repositorio Universidad del Rosario*. Recuperado el 27 de abril de 2021, de Retos y oportunidades de la integración migratoria: análisis y recomendaciones para Bogotá D.C.:  
<https://www.kas.de/documents/287914/0/Retos+y+oportunidades+de+la+integraci%C3%B3n+migratoria+en+Bogot%C3%A1+%28F%29.pdf/1453da53-8711-7b17-ebb1-125bd385ee40?t=1606147278960>
- Valencia, Z. A., & Ortiz, M. A. (2016). *Derecho Civil. Tomo I Parte General Civil y Personas* . Bogotá: Temis.
- Villegas, L. G. (2011). La nacionalidad en la Constitución Política colombiana de 1991. *Revista Derecho del Estado*, 143-152.